



Comunicado de prensa

GT-06-2021

Icefi: La corrupción, las limitadas oportunidades laborales y la debilidad estatal y fiscal han forzado a miles de guatemaltecos a migrar

Con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Guatemala, se llevó a cabo la presentación del estudio «La migración forzada en Guatemala. Algunas reflexiones económicas y fiscales», elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) a solicitud de la Plataforma Migración y Desarrollo y con el apoyo de DVV International. Esta investigación muestra los principales fenómenos económicos y sociales que están forzando la migración en Guatemala, así como las condiciones de vida de los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos y el papel que las remesas juegan para el bienestar de sus hogares y la economía nacional. Finalmente, el estudio plantea recomendaciones de política pública y política fiscal para mitigar las causas estructurales de la migración forzada.

Estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala revelan que aproximadamente 3.0 millones de guatemaltecos viven en el exterior. De estos, 2.9 millones, el 95.0%, reside en los Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina de Censos y Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, 7 de cada 10 migrantes guatemaltecos enfrentan limitaciones para hablar el idioma inglés. Asimismo, cerca de 6 de cada 10 no completaron la educación secundaria, lo que afecta su inserción laboral y los ingresos esperados por su trabajo. Este contexto explica por qué el promedio de ingresos anuales de un migrante guatemalteco asciende a USD43,000.0, por debajo del promedio de los migrantes en general, el cual se ubica en USD56,700.00 anuales.

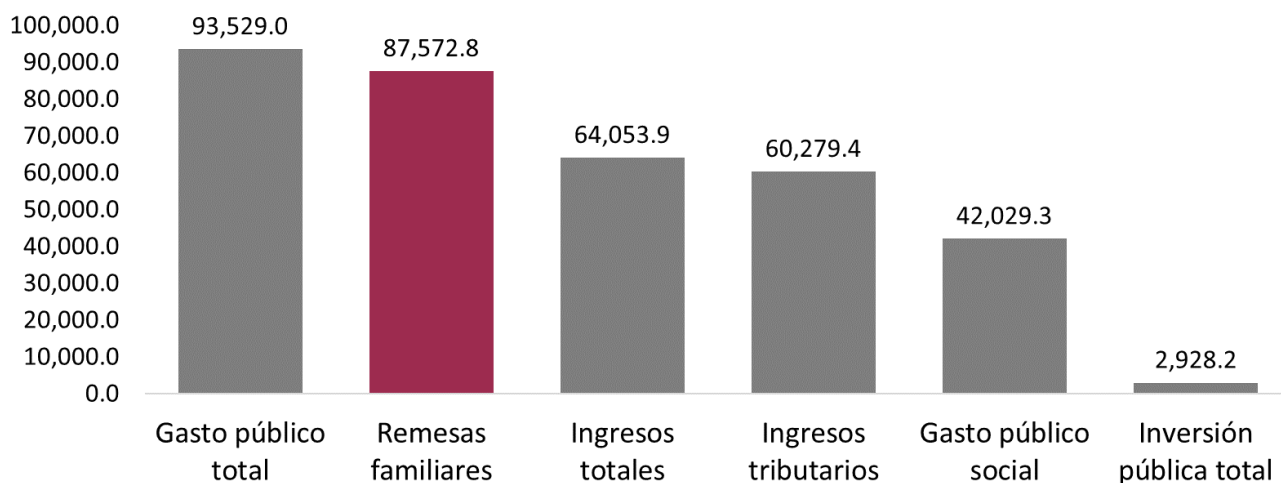
Dentro de los fenómenos económicos y sociales que están forzando la migración, el estudio puntualiza en cuatro. Primero, el mercado laboral guatemalteco no distribuye la riqueza ni genera empleos en la cantidad y calidad requerida para absorber a toda la población en edad de trabajar. En ese sentido, las más recientes estadísticas oficiales del mercado laboral (ENEI-2 2019) evidencian que cerca de un 65.3% de la población ocupada labora en condiciones de informalidad, porcentaje que aumenta en las mujeres, la población rural e indígena. Asimismo, el 80.0% de los trabajadores con menos ingresos en Guatemala, reportan un promedio de entre Q407.0 y Q2,857.0 mensuales, monto muy alejado del costo de vida. Segundo, la provisión de bienes y servicios públicos es insuficiente para garantizar el bienestar y disminuir la desigualdad social. Son evidencia de esta debilidad estatal los aproximadamente 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a la escuela, así como el 46.5% de niñas y niños menores de cinco años que padece desnutrición, y los 54.8% de hogares guatemaltecos que viven en situación de pobreza monetaria.

En tercer lugar, el estudio apunta a la política fiscal, pues esta contribuye muy poco a concretar objetivos de desarrollo y consolidación democrática. A la baja carga tributaria del país (10.2%), acompañada de altos niveles de evasión y de una estructura impositiva injusta, repleta de privilegios fiscales para sectores económicos pujantes, se agrega un gasto público con tendencia a la reducción, mal gestionado, y amplios caminos a la corrupción. Finalmente, el cuarto fenómeno lo constituyen las bajas inversiones privadas que impiden aumentar la capacidad productiva del país. Guatemala tiene la tasa de inversión más baja de Centroamérica

(13.5% del PIB, en contraste con Panamá, 40.0% del PIB), afectada por la gestión poco democrática del poder público y privado, la baja educación de la población y la corrupción.

En cuanto a las remesas familiares, la investigación se centra en sus impactos micro y macroeconómicos. Según las estadísticas más recientes, aproximadamente 1.6 millones de hogares se benefician de las remesas familiares, las que en promedio ascienden mensualmente a USD379.0, monto que se utiliza principalmente para consumos básicos (35.0%), compra y mejoras de inmuebles (47.0%), educación y salud (8.0%) y negocios (7.2%). A nivel nacional, las remesas familiares, en 2020, sumaron USD11,340.4 millones (Q87,572.8 millones) y equivalieron al 14.8% del PIB, constituyéndose en el flujo de ingresos del exterior más importante para la economía guatemalteca, superando a las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa. En comparación con variables de finanzas públicas, las remesas familiares en 2020, fueron equivalentes al 93.6% del gasto público total, y representaron 2 veces el monto del gasto social total y 30 veces el total de inversión pública.

Guatemala: comparación del monto de remesas familiares con variables del sector fiscal en 2020, en millones de quetzales



Fuente: Icefi con base en estadísticas del Banguat y Minfin.

Entre las principales recomendaciones para mitigar las causas que provocan la migración forzada de guatemaltecos, el estudio propone, 1) el diseño y ejecución de políticas públicas que universalicen el acceso a bienes y servicios públicos (pisos de desarrollo social, territorial y económico). 2) ejecutar un plan ambicioso de protección social buscando el doble dividendo de reducir la migración forzada y contribuir al alcance de las metas contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 3) en particular, Icefi propone una agenda para el cumplimiento de los ODS (2020-2030) que de concretarse aumentaría el crecimiento económico anual al 4.0% y generaría 26,000 empleos directos anuales, duplicando así el promedio de creación de empleos formales en la actualidad; 4) es necesario reconocer que para mitigar las causas estructurales que provocan la migración forzada solo se logrará en la medida en que el gobierno, los partidos políticos, los países



cooperantes, el sector empresarial y las fuerzas sociales acuerden y ejecuten un plan de desarrollo que ponga a las personas en el centro.

Finalmente, el Instituto, en el contexto de la presentación de este trabajo, insiste en que una Guatemala diferente requiere de una política fiscal y una institucionalidad pública distintas: una hoja de ruta concreta para el combate de la corrupción y la impunidad, un pago mayor y más justo de impuestos y garantías de respeto al Estado de derecho, entre otros cambios. La definición técnica de los cambios necesarios para un país con mayor bienestar, desarrollo y paz ha sido manifestada en este y otros trabajos realizados por diferentes organismos e instituciones. Es necesario ahora que la sociedad desarrolle la voluntad política que permita una correlación de fuerzas afín a estos nuevos compromisos y responsabilidades. De lo contrario la migración forzada por la realidad cotidiana continuará siendo el camino para miles de guatemaltecos.

Guatemala, Centroamérica, 4 de junio de 2021.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org.